

## ANÁLISIS DIEZ AÑOS DE LA CONFESIÓN

Las 575 palabras que hundieron la reputación de Jordi Pujol

R. MATEOS EFE / BARCELONA

«Mi padre, Florenci Pujol i Brugat, dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero —diferente al comprometido en su testamento—, rendimiento de una actividad económica de la que ya se ha escrito y comentado, y que no se encontraba regularizada en el momento de su muerte, en septiembre de 1980, se destinara a mis siete hijos y a mi esposa...». Así arranca el primer punto del comunicado que, a las seis de la tarde del 25 de julio del 2014, el abogado del expresidente catalán Jordi Pujol envió a todas las redacciones para salir al paso de las informaciones sobre una presunta fortuna familiar ilícita y oculta.



Jordi Pujol.

Aquel comunicado de 575 palabras escrito en catalán contenía una confesión inaudita: el reconocimiento explícito y sin precedentes de que durante décadas su familia había ocultado en el extranjero unos fondos heredados de su padre, Florenci. Se trataba de unas cuentas en Andorra, un dinero jamás regularizado y que acabó siendo detectado por las autoridades españolas.

La confesión de Pujol venía acompañada de una petición de perdón, un acto de contrición con el que esperaba atenuar el impacto de la revelación, sin sospechar el terremoto político y social que iba a provocar su escrito, que venía precedido de un goteo de artículos que lo situaban en el ojo del huracán.

Cuatro días después de la confesión, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció la renuncia de Pujol a todos sus cargos en CiU y CDC y a las prerrogativas como expresidente, entre ellas, además del tratamiento protocolario de muy honorable, figuraban una pensión vitalicia de 82.000 euros al año, un despacho en el paseo de Gràcia, personal de apoyo en esta oficina y coche oficial.

A sus 94 años, viudo tras la muerte de su esposa, Marta Ferrusola, Pujol aspira a cerrar su biografía recuperando, al menos, parte del reconocimiento público que vio volatilizarse aquel 25 de julio del 2014.

## ELDA MATA PRESIDENTA DE SOCIEDAD CIVIL CATALANA

«Olvidar los delitos del “procés” es ceder al chantaje nacionalista»

«Los separatistas no se arrepienten de nada, siguen su hoja de ruta», avisa

XAVIER GUAL  
BARCELONA / E. LA VOZ

Elda Mata Miro-Sans (Barcelona, 1953) es una de las caras de la defensa del constitucionalismo en Cataluña. Preside la organización Sociedad Civil Catalana, que agrupa a cientos de anónimos ciudadanos que se declaran hartos de la imposición de los deseos independentistas de quienes no son más que una minoría en Cataluña, como queda de manifiesto encuesta tras encuesta. Ahora se sienten abandonados por un Gobierno que ha decidido a aceptar todas las exigencias de los separatistas por la necesidad de sus votos para seguir en el poder.

—Han pasado 40 días desde la entrada en vigor de la amnistía. ¿Cómo valora la resistencia judicial a aplicarla?

—Sabíamos que habría mucha oposición a la aplicación de la amnistía en los tribunales de Justicia. Estamos donde creíamos que íbamos a estar, que es en el caos total de una ley que consideramos que no debería haberse aprobado nunca y que afortunadamente se está encontrando con muchas trabas en el camino. El olvido de los delitos del procés supone ceder al chantaje nacionalista y lo único que va a producir es un agravio comparativo con el resto de los españoles y un envalentonamiento de los propios líderes separatistas.

—¿Confían en que el Constitucional avale la doctrina del Supremo, contrario a perdonar la malversación del procés?

—Estamos viendo cosas muy extraordinarias en los últimos tiempos, como si el Constitucional se hubiera convertido en una cuarta sala. En todas estas causas en las que nos oponemos desde Sociedad Civil Catalana vemos que hay argumentos que avalan la inconstitucionalidad de la ley, total o parcial. Y creo que estos tendrán que ser escuchados por el Constitucional. Les va a costar decir que no hay ninguna pega jurídica en su aplicación.

—Puigdemont tiene intención de regresar en agosto.

—Él sabe lo que se juega, tiene que responder ante la ley por unas acusaciones muy concretas, que pueden ir ampliándose con el tiempo, y ahora está valorando si le compensa o no volver. Lo único que le puede empujar a regresar es que esto le supon-

ga a él o a su partido algún rédito político.

—La ANC está agitando las calles. ¿Qué puede pasar si vuelve y es detenido?

—Si Puigdemont vuelve en olor de multitudes o en el maletero del coche, como es costumbre, no lo sabemos. Pero al final, la ley se acabará aplicando, y él lo sabe. Por eso está estudiando de siete maneras distintas si venir o no, diciendo y desdiciendo... En fin, ya veremos.

—La causa de Tsunami, por la que estaba siendo investigado por terrorismo, fue archivada por un error procesal...

—Estamos convencidos de que Tsunami no debería cerrarse, hay posibilidades de que así sea. Nosotros nos atenemos siempre a la ley, pero lo seguimos peleando. Focalizamos mucho en Puigdemont, pero los hechos que hay detrás son muy graves. Lo que pasó en Cataluña en el 2019 fue una movilización masiva para tratar de coartar e impedir el correcto funcionamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay que investigarlo, porque puede volver a ocurrir. Los nacionalistas no se arrepienten, siguen su hoja de ruta. Mire qué ha dicho Marta Rovira al regresar a España: que vuelven para acabar lo que empezaron.

—Los independentistas acusan a los jueces de perseguirlos por razones políticas. ¿Usted cree



Elda Mata, durante un acto de Sociedad Civil Catalana.

que hay lawfare en España?

—No, no lo creo. Siempre habrá profesionales de la judicatura que acierten más o menos. El lawfare no existe, es puro victimismo independentista, muy en la línea de lo que suele hacer el nacionalismo catalán, creerse víctima de todo. Todo lo que va en su contra lo considera represivo e ilegítimo. Lo peor es que el Gobierno ha comprado ese relato. La acusación de lawfare responde puramente a la compra de los votos nacionalistas para seguir gobernando España.

—¿Usted cree que la amnistía ha servido para pacificar Cataluña, como defiende el Gobierno?

—Absolutamente no. Yo vivo en un pequeño pueblo de Girona, donde ni los empresarios se atreven a alzar la voz contra el nacionalismo porque muchos contratos dependen de la Generalitat, que no es una Administración neutral. Yo veo cómo a los niños se les obliga a hablar catalán en

la escuela o que para acceder al empleo público se exijan niveles de catalán insalvables. Mucha gente se calla, porque no quiere ser señalada como los padres del niño de Canet. No solo se obliga a la inmersión lingüística, sino que se excluye todo lo español, con los resultados pésimos que vemos en los informes PISA. —Illa y el PSC han ganado las elecciones, pero lo que se está negociando, como la financiación singular, pasa por el Gobierno de España, que está supeditado a los votos nacionalistas.

—Mire qué ha pasado con el Parlamento de Cataluña, que sigue en manos independentistas. Llevamos 45 años de políticos cortos de miras en su relación con Cataluña, primero con CiU y ahora con Junts, que ha permitido que el nacionalismo tenga un peso que no le corresponde. No es lógico que el Gobierno de España dependa de partidos que quieren romper España.

## El PSC y Esquerra negocian los últimos flecos para investir a Salvador Illa

X. GUAL BARCELONA / E. LA VOZ

Salvador Illa está cada vez más cerca del palacio de la Generalitat. Socialistas y republicanos encaran los últimos flecos de una negociación que llegará a su fin en cuestión de días o de horas. Otra cosa es que el preacuerdo pase el filtro de la militancia de un partido en convulsión tras el último batazo electoral del 12 de mayo, dividido entre partidarios y contrarios a Illa, y que va sumando escándalos desde que aparecieron los carteles difamatorios contra los Maragall. El último, el del muñeco de Junqueras. La portavoz de ERC, Raquel Sans, reconoció ayer que el acuerdo puede ser inminen-

te, si bien añadió que quedan «más que flecos». En declaraciones a la Ser, la dirigente independentista señaló: «El acuerdo podría llegar de forma inminente, porque es el límite que nos hemos fijado, porque siempre hemos recordado que, si bien el PSC ha optado por la negociación con ERC, dispone de otras mayorías y queremos dárles margen».

Las negociaciones se centran en cuatro carpetas: la resolución del conflicto político, la financiación, el catalán y las políticas sociales. La segunda, la soberanía fiscal, es sobre la que «todavía» están negociando, añadió Sans, quien no escondió que en el partido hay un sentimiento de

desconfianza hacia el PSOE por los incumplimientos: «Una cosa son las buenas palabras y llegar a acuerdos, pero vemos que algunos de estos acuerdos no se cumplen».

### Las advertencias de Junts

Un día después de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, el secretario general de Junts, Jordi Turull, advirtió a los socialistas de las consecuencias de pactar con Esquerra. Turull subrayó que su partido no pacta con el PSOE para «apuntalar la gobernabilidad de España, sino para defender los intereses de Cataluña».